**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MULTIFUNCIÓN
AGUSTÍN CODAZZI – CESAR**

Agustín Codazzi – Cesar, Octubre Veintisiete (27) de Dos Mil Veintiuno (2021)

REF: Acción de Tutela promovida por CIRO ALFONSO BECERRA PÉREZ contra de la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR Y EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR.

Radicación No.: **200134089001-2020-00097-00**

ASUNTO A TRATAR

Aborda el Despacho la labor de adoptar la decisión de fondo que en derecho corresponda, dentro de la Acción de Tutela promovida por el señor CIRO ALFONSO BECERRA PÉREZ, en contra de la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, habiéndose vinculado como accionado al MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR, en defensa de su Derecho Fundamental a la Petición, consagrado en los artículos 23 de la Constitución Política, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

Correspondió a este despacho, por reparto, la presente Acción de Tutela promovida por el señor CIRO ALFONSO BECERRA PÉREZ en contra de LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR, habiéndose vinculado a la misma, también como accionado, al MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, en defensa de su Derecho Fundamental a la Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y en virtud de ello solicita se le ordene a la accionada, lo siguiente: a) _ Solicitar de manera inmediata la información que se encuentra cargada a su identidad en el S.M.T. con Radicado de Comparendo No._ 20013000000011352490. b). _ Hacerle entrega de una copia íntegra del expediente administrativo que se adelanta en su contra, que incluye ya todas las actuaciones, tanto audiencias y notificaciones.

Los hechos en los que el accionante finca su solicitud, los por el siguiente:

- Que el día 27 de Agosto del año 2020, radicó Derecho de Petición el cual fue recibido por el señor Octavio Lemus a las 08:50 horas con número de radicado 268
- Que, en dicho Derecho de Petición, solicito de manera inmediata la eliminación de la información que se encuentra cargada a su identidad en el S.M.T. con Radicado de Comparendo No._ 20013000000011352490

Fueron acompañados como pruebas por parte del accionante, las siguientes: a).- Copia del Derecho de Petición.

Por venir en legal forma la solicitud fue admitida mediante Auto de fecha 1 de Octubre del año que cursa, requiriéndose a la entidad accionada SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, y a la vinculada MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR, para que en el término de dos (2) días contados a partir de la fecha de la notificación del auto admisorio, se sirvieran rendir un informe sobre los hechos planteados por el petionario, habiéndose pronunciado la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR solamente, a la través del señor Secretario de Tránsito Doctor MIGUEL WALTER BARBOSA CARREÑO, en su aflicida calidad de abogada general de la misma.

Una vez enunciados los antecedentes del caso y habiendo sido examinado el acervo probatorio acopiado, procederemos a adoptar la decisión de fondo que en derecho corresponda, previas las siguientes...

CONTESTACIÓN DE LA ACCIONADA LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR.

El señor MIGUEL WALTER ENRIQUE BARBOSA CARREÑO, en su calidad de Secretario de Tránsito y Transporte de esta Municipalidad, mediante oficio radicado en este despacho manifiesta que ese organismo de Tránsito, en aras de salvaguardar el derecho fundamental de petición, procedió a emitir Oficio de fecha 15 de Octubre de 2020 por medio del cual se dio respuesta a la Petición elevada por el señor CIRO ALFONSO BECERRA PÉREZ el día 15 de Octubre del 2020, habiéndosele enviado dicho oficio al correo electrónico cyt@agustincodazzi.gov.co indicado por el peticionario.

Agrega el representante de la accionada que frente a la protección del derecho fundamental de petición, existe carencia actual de objeto por hecho superado y en consecuencia solicita se profiera un fallo desestimatorio de las peticiones por cuanto en el presente no existe una violación a los derechos argumentados.

Una vez enunciados los antecedentes del caso y habiendo sido examinado el acervo probatorio acopiado, procederemos a adoptar la decisión de fondo que el estricto derecho corresponda, previas las siguientes...

CONSIDERACIONES

1. _ Competencia

Para el Juzgado es claro que la competencia para conocer de la presente acción de Tutela, recae en este despacho al tenor del artículo 37 del Decreto - Ley 2590 del 1991 y del Decreto 1382 de 2000.

2. _ Legitimidad de las Partes

El accionante, CIRO ALFONSO BECERRA PÉREZ, por ser la persona afectada con las presuntas acciones y omisiones de las entidades demandadas, es presunto legitimado para incoar la presente acción de amparo. Así mismo, la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI- CESAR por ser la primera entidad a la cual el accionante le atribuye los actos que presuntamente vulneran su derecho fundamental cuyo amparo es deprecado y la segunda por haber sido vinculada a esta acción, reúnen los presupuestos de legitimidad para comparecer en calidad de accionadas dentro de este trámite tutelar.

3. _ Problemas jurídicos y esquema de resolución

De acuerdo con la situación fáctica planteada corresponde a este despacho determinar los siguientes aspectos: **i).** La procedencia de la acción; y, **ii).** De ser procedente la acción, establecer si las entidades accionadas SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI- CESAR, y el MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI- CESAR, por presuntamente no haberle brindado una respuesta a la solicitud presentada en virtud del derecho de petición, por el señor CIRO ALFONSO BECERRA PÉREZ, vulnera el derecho fundamental cuyo amparo es deprecado, y de ser así, adoptar las medidas de protección pertinentes, o si nos encontramos ante la figura denominada "hecho superado".

Para resolver los problemas jurídicos planteados, este despacho procederá de la siguiente manera: **1).** Se determinará la procedencia de la acción. **2).** Se atenderá al derecho fundamental cuya protección se impetra. **3).** Se traerá como referencia a Ley 1755 de 2015, respecto al término para emitir respuesta a las peticiones. **4).** Se hará alusión al fenómeno denominado "hecho superado"; y, **5).** Se abordará el caso en concreto.

3.1. _ Procedencia

Respecto a la procedencia de la Acción de Tutela es dable aclarar que esta al ser elevada a precepto constitucional por el Constituyente de 1991, ha sido concebida como un medio de defensa, ágil, eficaz, preferente, residual y sumario de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y en algunos casos por los particulares cuando éstos desempeñen en alguna de las siguientes condiciones: a) Cuando cumplan funciones públicas o que estén encargadas de la prestación de un servicio público. b) Cuando realicen acciones u omisiones

afecten grave y directamente el interés colectivo; y c). _ Cuando el accionante se halle en estado de subordinación o indefensión respecto al particular.

En razón de lo anterior Nuestra Carta Política en su artículo 86 dispone:

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública."

Se le quiso dar a esta herramienta constitucional un efecto inmediato y subsidiario al limitar su procedencia a la inexistencia de otro medio de defensa judicial, a su eficacia para la protección del derecho, o que, habiéndolo, esta se utilice como un mecanismo de carácter transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Quiere lo anterior significar que la acción de tutela es un mecanismo único de protección de los derechos fundamentales que procede *i)* cuando el afectado no dispone de otro instrumento para su restablecimiento, *ii)* en caso de que el previsto no resulte eficaz, en consideración a la situación particular que afronta el actor y *iii)* siempre que la intervención transitoria del juez de amparo resulte necesaria, para evitar o al menos mitigar un perjuicio irremediable.

En el caso bajo estudio el Despacho no observa la existencia de otro medio eficaz de defensa que le permita al accionante obtener la protección del derecho presuntamente vulnerado, por lo tanto es factible pregonar de la acción incoada, su procedencia.

3.2. _ Derecho Fundamental cuya protección se invoca

3.2.1. _ Derecho de Petición. _ En este orden de ideas cabe señalar que el Derecho de Petición es de aquellos que por su naturaleza de Constitucionales y Fundamentales admiten su protección a través de la vía expedita y sumaria de la Acción de Tutela. Consagra el artículo 23 Superior:

"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución."

Ahora bien, para que no se torne inocuo el derecho fundamental de petición se requiere no solo que el peticionario tenga la facultad de presentar la solicitud, sino que esta sea resuelta en forma rápida, oportuna y de fondo. No basta entonces que el encargado de resolver la petición, se limite a generar una respuesta somera o superficial sobre el asunto objeto del derecho que se impetra. Se hace necesario también que se adecue una resolución a la situación planteada dentro de la solicitud y que el interesado reciba en materia real y efectiva la solución brindada, siendo indispensable que esa resolución se ponga en conocimiento de los interesados a través de un medio que asegure su eficacia.

Sobre el particular nos ilustra la sentencia T-181 de 1993 con la sentencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara, en los siguientes términos:

"(...) Puede afirmarse que el derecho fundamental sería inocuo si no se formulara en términos de poder presentar la respectiva petición. Lo que hace efectivo el derecho es que la petición elevada sea resuelta rápidamente. De nada serviría el Derecho de Petición, si la misma Constitución no consagrara el correlativo deber de las autoridades de proferir pronta resolución (...)"

Más adelante, en Sentencia a T-558 de 2012, dijo:

"(...) El derecho de petición, como institución jurídica, encuentra su razón de ser en la necesidad de regular las relaciones entre las autoridades y los particulares con el fin de que estos últimos puedan conocer y estar al tanto de las actuaciones de cualquier ente estatal. Desde este punto de vista, su núcleo esencial está en la pronta respuesta que se le brinde a las solicitudes presentadas."

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado la relevancia que cobra el derecho fundamental de petición, ya que se constituye en un instrumento clave para el funcionamiento de la democracia participativa, y para el acceso a derechos como el de información y libertad de expresión, entre otros."

En ese orden de ideas, la Corte ha manifestado, a su vez, que el derecho de petición no solo implica la posibilidad de presentar solicitudes a las autoridades competentes, a entes particulares, cuando la ley lo permita, sino, de igual manera, que se reciba una oportuna respuesta con sujeción a los requerimientos establecidos en la ley para una petición. Es decir, independientemente de que lo resuelto por la entidad se refiera o no a los intereses del peticionario, la resolución del asunto debe contar con un desarrollo minucioso de lo pretendido, argumentos claros, que sea coherente, dándose respuesta a lo que se plantea de manera precisa, suficiente, efectiva y sin evasivas de ninguna especie. Sobre el particular ha sostenido la Corporación que:

"... una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la respuesta es clara en el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.), y es oportuna cuando existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que el contenido de lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema secundario o ajeno al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de buscar información adicional que se encuentre relacionada con la petición planteada."

"(...) Así, para tener claridad sobre los elementos del derecho de petición, esta Corporación ha indicado que el mismo se compone de:

1. La posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
2. La obtención de una respuesta que tenga las siguientes características:
 - (i) Que sea oportuna;
 - (ii) Que resuelva de fondo, en forma clara y precisa lo solicitado, lo cual supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud de manera completa, sin evasivas respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados.
 - (iii) Que la respuesta sea puesta en conocimiento del peticionario.
3. La respuesta es independiente del hecho de si es favorable o no, pues no necesariamente dar una respuesta de fondo implica un resultado positivo.

"(...) Bajo ese entendido, para que la respuesta a la petición se encuentre ajustada a la ley y a lo que la jurisprudencia constitucional ha manifestado al respecto, la misma, además de ser oportuna y de fondo como ya se mencionó, debe ser comunicada al peticionario. (Subrayas y negritas del texto original).

De igual manera, por tratarse de un derecho con categoría fundamental susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela. No obstante, para que el amparo proceda, no basta con afirmar que se elevó una petición, sino que debe haber prueba, siquiera sumaria, de la misma, es decir, que se cuente con alguna prueba o herramienta que permita respaldar la afirmación, y por su parte, es la autoridad que debe demostrar que dio respuesta oportuna, clara y de fondo a la solicitud planteada.

En ocasión ulterior, en Sentencia T-801/12, dispuso:

"(...) En relación con su contenido y alcance, la Corte ha señalado que: i) es determinante para la efectividad de los mecanismos de la tutela el contenido esencial comprende: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en el fondo de la materia propia de la solicitud sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta, excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo resuelto al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo."

3.3. _ Ley 1755 de 2015 (Reglamentación al Derecho de Petición).

Procedente es analizar lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 respecto de los términos para responder los derechos de petición, el cual menciona:

"Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Si la petición es sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de los documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver dentro de los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al peticionario antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando lo que motivó la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta. Este plazo no podrá exceder del doble del inicialmente previsto."

3.4. Hecho superado.

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en aclarar que una vez superada la situación de hecho que generó la vulneración o la amenaza del derecho fundamental, la acción de amparo perdería su eficacia tornándose improcedente e inoportunas.

Sobre el particular, en sentencia T-167 de 1.997, nos ilustra:

"(...) El objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos en que establece la constitución y la ley. Obsérvese que la eficacia de la tutela se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez constitucional si encuentra probada la vulneración o amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente del derecho en disputa. Pero si la situación de hecho que generó la violación o la amenaza ya ha sido superada, el mandato que pueda proferir el juez en defensa de los derechos fundamentales conculcados, en el hecho podría tener, el proceso carácter de objeto y la tutela resultaría improcedente. En consecuencia, la acción de tutela perdería su razón de ser (...)"

En Sentencia T-013 de 2017, reiteró:

"(...) El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal naturaleza que dio origen al pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, en el contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Es decir, el hecho superado se refiere a la consecución de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor. El daño consumado tiene lugar cuando "la amenaza o la vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela. La configuración de este supuesto ha sido declarada por la Corte, por ejemplo, en los casos en que el solicitante de un tratamiento médico fallece durante el trámite de la acción como consecuencia del obrir negligente de su E.P.S., o cuando quien invocaba el derecho a la vivienda digna fue desalojado en el curso del proceso del inmueble que habitaba (...)"

3.5. El caso concreto.

En el evento que nos ocupa, del caudal probatorio compuesto especialmente de lo manifestado en la solicitud por parte del accionante puede inferirse que la situación planteada consiste en que el señor CIRO A. FERRER LECERRA PEREZ, reclama ante la entidad accionada emita respuesta a la solicitud de amparo en virtud del Derecho de Petición el día 27 de Agosto del 2020, observando que el doctor MIGUEL WALTER ENRRIQUE BARBOSA, en su calidad de Secretario de Turismo y Transporte Municipal, al pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de la acción de tutela, manifiesta que mediante documento enviado por correo electrónico a rymjuridicos@gmail.com, suministrado por el petente emite respuesta de fondo a la solicitud elevada por el referido accionante, declarando la prescripción de la acción de tutela por Resolución